Distr.
GENERAL

CCPR/C/SR.1199
21 de septiembre de 1993

ESPAÑOL
Original: INGLES

COMITE DE DERECHOS HUMANOS

46° período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1199ª SESION

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el martes, 3 de noviembre de 1992, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. POCAR

SUMARIO

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (continuación)

Segundo informe periódico de Venezuela (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 40 DEL PACTO (tema 4 del programa) (continuación)

Segundo informe periódico de Venezuela (CCPR/C/37/Add.14) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la delegación a que continúe respondiendo a las preguntas formuladas por los miembros del Comité durante el debate sobre la sección II de la lista de cuestiones.
2. La Sra. POITEVIEN (Venezuela) explica que el Ministerio Público es una institución autónoma independiente de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de Venezuela. El Ministerio Público, que está encargado de vigilar la aplicación de los derechos humanos y el respeto del orden constitucional y legal, atribuye una gran importancia al debate en el Comité sobre la aplicación del Pacto por Venezuela. El Ministerio Público reconoce la labor de promoción de la causa de los derechos humanos realizada por el Comité y por otros órganos de las Naciones Unidas.
3. El examen por el Comité de la aplicación del Pacto es importante también porque el Pacto está por encima de las normas y leyes nacionales en la jerarquía de las leyes de Venezuela, lo que permite invocar en los tribunales los derechos humanos que no figuran en la Constitución del país. El Fiscal General de la República ha hablado frecuentemente sobre la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y despolitizar los organismos administrativos y judiciales, de resolver la crisis de la separación de poderes y de prevenir las violaciones de los derechos humanos.
4. La pregunta formulada por el Sr. El Shafei en relación con el párrafo 278 del informe parece atribuible a un error de traducción, y la oradora pide a la Secretaría que se ocupe del tema.
5. Hay tres departamentos jurídicos y algunos organismos ejecutivos que tienen autoridad en cuestiones de medio ambiente y se han tratado varios casos importantes de protección del medio ambiente.
6. Sobre el tema de la corrupción, figuran en el informe numerosas investigaciones realizadas por varios organismos competentes, pero el problema persiste todavía en formas visibles e invisibles. El Ministerio Público ha señalado que ambos tipos de corrupción son peligrosos y deben combatirse.
7. En relación con la Ley sobre vagos y maleantes de 1956, la oradora dice que esta Ley trata del peligro potencial de la comisión de delitos. Corresponde a los organismos administrativos competentes decidir las medidas que deben aplicarse. El Ministerio Público considera que esta Ley es anacrónica, pero las iniciativas encaminadas a sustituirla no han dado fruto. En cuanto a las condiciones que permiten encarcelar a vagos y maleantes, si la

privación de libertad tiene que ser muy breve el encarcelamiento se realiza en centros dependientes del Ministerio de Justicia, que está encargado de la administración penal. Las condiciones de encarcelamiento de vagos y maleantes son las mismas que las de los presos normales.

8. El Sr. Prado Vallejo ha preguntado sobre la existencia de casos de impunidad a raíz de los acontecimientos de febrero de 1989. Esta impunidad puede explicarse por varios motivos. El Ministerio Público ha desarrollado en todo momento denodados esfuerzos para investigar, descubrir pruebas y resolver las quejas. Se ha instado a los tribunales a ordenar la exhumación de cadáveres a fin de obtener datos adicionales que permitan responder a las preocupaciones expresadas por los familiares de las víctimas. Todavía no se han conseguido resultados, habida cuenta de las dificultades que supone el asignar responsabilidades individuales, la información insuficiente sobre la ubicación de las fosas comunes y otros problemas técnicos. La delegación de Venezuela tiene un gran interés en oír las recomendaciones del Comité sobre este punto.

9. El Ministerio Público también ha actuado inmediatamente para investigar todas las acusaciones de tortura. En 1991, presentó 2.500 peticiones a los tribunales para que se investigaran los hechos. Esas investigaciones se llevaron a cabo en respuesta a las denuncias de que funcionarios del Gobierno habían cometido delitos: ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias o abuso de poder, entre otros. En 1991 se había llegado a la conclusión de que en 800 casos de un total de 2.500 estaba justificado formular cargos contra funcionarios del Gobierno. En 61 de estos casos se han presentado cargos por los conductos judiciales normales y algunos casos están todavía en investigación. De enero a agosto de 1992 se han presentado a los tribunales un total de 1.527 peticiones de investigación de los hechos.

10. La Sra. HIGGINS dice que todavía no entiende exactamente por qué la investigación de los cargos contra funcionarios del Gobierno debe realizarse por conductos que no son los conductos judiciales normales. También desea saber cuántos funcionarios han sido sentenciados realmente.

11. La Sra. POITEVIEN (Venezuela) dice que los conductos judiciales normales están reservados para los particulares pero que la llamada de investigación de los hechos es un procedimiento especial que se aplica cuando se acusa de delitos a funcionarios del Gobierno. La finalidad de ello es proteger a los funcionarios de acusaciones arbitrarias e infundadas. La oradora dice carecer de información sobre el número de funcionarios sentenciados.

12. El PRESIDENTE dice que ha concluido el examen de la sección II de la lista de cuestiones. Invita a continuación a la delegación a responder a las preguntas de las secciones III y IV, que dicen lo siguiente:

- "III. Libertad de circulación y expulsión de extranjeros; derecho a la vida privada; libertad de religión, de expresión, reunión y de asociación; derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos (arts. 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 25)
- a) Sírvanse facilitar más información sobre la pena de extrañamiento, prevista en los artículos 53 a 56 del Código Penal, y la Ley de conmutación de penas por indulto o extrañamiento del territorio nacional de fecha 15 de diciembre de 1964, así como comentar la compatibilidad de esas disposiciones con el artículo 12 del Pacto. (Véanse los párrafos 196 y 197 del informe.)
 - b) Sírvanse formular comentarios acerca del contenido del proyecto de ley sobre la protección de la vida privada, al que se refiere el párrafo 309 del informe, e informar si ya ha sido aprobado por el Congreso.
 - c) Sírvanse informar si se han aprobado la Ley que regula las manifestaciones, marchas y demás actividades de protesta pacífica y la Ley contra el uso de armas para el control de manifestaciones, y, de ser así, si con ellas se ha logrado reprimir los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones pacíficas. (Véase el párrafo 389 del informe.)
- IV. Derechos de las personas pertenecientes a minorías (art. 27)
- a) Sírvanse dar detalles sobre los factores y dificultades que afectan a la aplicación del artículo 27 del Pacto, en particular respecto de la discriminación contra las poblaciones indígenas, individual y colectivamente. (Véanse los párrafos 457 a 467 del informe.)
 - b) Sírvanse informar si el Congreso ha aprobado el proyecto de ley orgánica de comunidades, pueblos y culturas indígenas, y si la delegación en las misiones católicas de la tarea de "reducir y civilizar a los indígenas" es compatible con los derechos de las comunidades indígenas previstos en el proyecto de ley, así como con el artículo 27 del Pacto. (Véase el párrafo 465 del informe.)
 - c) Sírvanse informar si se ha reformulado el artículo 77 de la Constitución para incluir el reconocimiento específico de los territorios, tradiciones, religiones y lenguas de las comunidades indias de Venezuela, como lo aconsejara la Comisión Bicameral, según consta en el párrafo 470 del informe."

13. El Sr. ARTEAGA (Venezuela), refiriéndose al párrafo a) de la sección III de la lista, dice que la pena de extrañamiento impone a un ciudadano la obligación de no regresar al territorio nacional hasta que haya pasado un período determinado. Los tribunales la imponen únicamente cuando lo pide el mismo ciudadano o su representante legal, y supone la conmutación de una sentencia dictada ya por las autoridades judiciales competentes. Se considera ventajosa porque ofrece libertad de circulación al ciudadano mientras se mantenga fuera del territorio nacional. En cuanto a la compatibilidad de esta medida con el artículo 12 del Pacto, los derechos enunciados en ese artículo comprenden la libertad de circulación, pero una persona condenada a prisión sufre por definición una restricción de este derecho. El Gobierno de Venezuela considera que la medida está arraigada en la obligación que tiene el Estado de administrar justicia. Es un acto administrativo discrecional que debe aplicarse de conformidad con las leyes pertinentes.

14. En relación con la cuestión III b), el orador dice que el objetivo del proyecto de Ley sobre la protección de la vida privada es proteger el carácter privado, confidencial, inviolable y secreto de las comunicaciones entre las personas. La ley impone penas por el registro u obstaculización de estas comunicaciones. La Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley, pero no lo ha hecho todavía el Congreso en su conjunto y, por lo tanto, todavía no se ha convertido en ley.

15. En relación con la sección III c) el orador dice que la Ley que regula las manifestaciones, marchas y demás actividades de protesta pacífica y la Ley contra el uso de armas para el control de manifestaciones no se han aprobado todavía porque las está estudiando el Congreso. Se espera que se convertirán en leyes en el próximo año. Sin embargo, se han tomado medidas para evitar los excesos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones pacíficas. Un ejemplo de ello fue la creación de unidades especiales en las filas de los mismos manifestantes durante una manifestación estudiantil celebrada el 20 de septiembre de 1992. Estas unidades tenían por objetivo prevenir la violencia, tanto de los estudiantes como de las autoridades, y los resultados fueron muy buenos. Otra medida específica adoptada para asegurar el desarrollo pacífico de las reuniones es la utilización de un camión provisto de un cañón de agua para controlar las reuniones ilegales.

16. La Sra. POITEVIEN (Venezuela) se refiere a la cuestión IV a) de la lista de cuestiones y dice que el Ministerio Público ha creado una oficina especial de ámbito nacional que se ocupará de las cuestiones de los indígenas. Existe también un departamento jurídico especial en el distrito administrativo de Bolívar, donde viven muchos indios.

17. Como ejemplo de la intervención eficaz del Ministerio Público para conseguir que se respeten los derechos humanos de los indios, la oradora señala que en un programa de televisión en que se proyectaba una imagen desfavorable de una mujer india se introdujeron modificaciones antes de su retransmisión para respetar la dignidad del personaje.

18. Todavía no se ha aprobado el proyecto de ley orgánica de comunidades, pueblos y culturas indígenas a que se refiere la sección IV b) de la lista. En cuanto a la frase que figura en la versión inglesa, "subduing and civilizing indigenous persons" ("reducción y civilización a los indígenas") (párrafo 465 del informe) la oradora explica que la palabra "subduing" es una traducción equivocada la palabra española "reducir". El término se refiere a un sistema que exige a los indios de cumplir con algunos elementos del sistema administrativo y judicial de Venezuela. Estas excepciones tienen por finalidad que los indios puedan vivir de conformidad con los aspectos de su cultura que no coinciden con las pautas culturales de otros habitantes de Venezuela. Estas excepciones fueron establecidas por primera vez por los conquistadores. En una ley aprobada en 1841 se utilizó la palabra "reducción" como sinónimo de "civilización" de los indios. Se trataba en realidad de "reducir" o persuadir a los indios para que vivieran en asentamientos fijos, pues hasta aquella época su existencia era nómada. En la Ley de misiones de 1915 el Estado de Venezuela delegó en la Iglesia católica la tarea de civilizar y "reducir" o ganarse a los indios.

19. La Sra. RUESTA de FURTER (Venezuela) dice que a la luz de la explicación que ha dado su colega debería corregirse la traducción de "reducir" por "subduing" que aparece en el párrafo 465 de la versión inglesa del informe. La palabra "reducir" se utilizaba a fines del siglo XIX y principios del XX con un sentido diferente del de la época moderna. De hecho todas las leyes de aquel período reflejan un enfoque paternalista que ya no es válido.

20. La Sra. POITEVIEN (Venezuela) dice que la zona de biosfera que se ha establecido en el territorio del Amazonas abarca una superficie de 3,9 millones de hectáreas. Constituye el mayor parque de Venezuela y el cuarto parque en superficie de toda la Tierra después de los de Groenlandia (Dinamarca), el Desierto de Gobi y el Canadá. El decreto de creación del parque establece con claridad que las autoridades civiles y militares están obligadas a respetar las tradiciones de las poblaciones indígenas de la zona. La finalidad de la zona es garantizar la supervivencia física y cultural del pueblo indígena. Las autoridades pueden adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección del medio ambiente y la relación armoniosa de las comunidades indígenas con él.

21. El Sr. LALLAH dice que le ha interesado enterarse de que el Ministerio Público ha creado una dependencia especial encargada de tratar el problema de la discriminación. Desearía recibir más información sobre el tipo de discriminación de que se trata.

22. En relación con los dos diputados indígenas del Congreso, desearía saber de qué modo garantiza el Estado que la población indígena ejerza sus derechos políticos y pueda estar representada a pesar de la discriminación que, como es sabido, sufre.

23. En relación con la lista de cargos públicos que figuran en el párrafo 450 del informe, el orador pregunta si algún indígena ha ocupado alguna vez algunos de estos cargos y, en caso contrario, si hay alguna esperanza de que pueda llegar a hacerlo.

24. Los párrafos 442 y 443 mencionan la situación de las personas privadas del derecho de voto por una decisión de los tribunales civiles y la de las personas excluidas por motivos penales. En relación con las personas excluidas por tribunales civiles el orador supone que se trata fundamentalmente de personas que carecen incluso de la capacidad mental para ocuparse de sus asuntos, pero desearía saber si hay otras categorías de personas también privadas del derecho de voto por los tribunales civiles. En relación con las personas excluidas por motivos penales, el orador no está seguro de que el Pacto permita la privación del derecho de voto como una pena accesoria.

25. El Sr. SERRANO CALDERA refiriéndose a la explicación dada acerca de la palabra "reducción", dice que la expresión se aplicaba también al acto de reunir a los indígenas para evangelizarlos, práctica común en Sudamérica. Sin embargo, el concepto mismo de "reducción" está en contradicción con las disposiciones del artículo 27 del Pacto, pues supone que se ejerce una presión sobre las poblaciones indígenas con respecto a sus costumbres y creencias para que adopten los valores y religión de una Potencia exterior. Esta cuestión se ha planteado de nuevo con ocasión del 500 aniversario del descubrimiento de América por Colón.

26. La idea de "incorporación" presupone ejercer una presión sobre las comunidades para obligarlas a asumir un concepto de unidad nacional. En el país del orador hubo grandes problemas con minorías étnicas como los miskitos, a los que se aplicó una política paternalista encaminada a integrarlos en la cultura dominante del país. El proyecto de ley orgánica de comunidades, pueblos y culturas indígenas a que se refiere el párrafo 458 del informe debería reflejar en mayor medida el espíritu del Pacto.

27. El Sr. EL SHAFEI, comentando la respuesta de la delegación de Venezuela sobre el extrañamiento, se plantea la posibilidad de que la persona afectada regrese a su país y se pregunta si en tal caso continuaría privada de sus derechos políticos.

28. En relación con el artículo 25 del Pacto el orador ha tomado nota de las condiciones expuestas en el informe para participar en la dirección de los asuntos públicos. No las considera como restricciones exageradas sino más bien como calificaciones necesarias para ciertos altos cargos.

29. El orador señala que según el párrafo 380 del informe las autoridades civiles pueden denegar la autorización para la celebración de una reunión pública aduciendo que sus fines son conspirativos. En su opinión, esta disposición puede dejar a las autoridades un margen de actuación demasiado amplio para prohibir reuniones.

30. En relación con el párrafo 365 del informe, observa que no existen leyes sobre el fomento del odio, la discriminación y la violencia contra los extranjeros, porque estas prácticas son desconocidas en Venezuela. Sin embargo, en opinión del orador, éste no es un motivo válido para no disponer de la legislación adecuada por si se diera una situación de estas características.

31. El Sr. WENNERGREN señala que en la Constitución de Venezuela solamente se menciona la libertad de religión en el artículo 65 y que de conformidad con el artículo 18 del Pacto ese derecho debería incluir la libertad de toda persona de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. En opinión del orador la palabra "creencias" no debería interpretarse necesariamente como referida a una religión. Una persona puede ser atea o creer que no está obligada a utilizar armas porque esto contradice el derecho fundamental a la vida. En relación con el párrafo 315 del informe, el orador pregunta cuál es la situación de los objetores de conciencia que no expresan sus creencias, pero que a veces se ven obligados a actuar contra ellas. Desearía saber si, en opinión de la delegación, la libertad de pensamiento y de conciencia es inherente a los seres humanos y, por lo tanto, está protegida por la Ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales. El orador pregunta si un objetor de conciencia puede ejercer una acción de amparo para proteger su libertad de pensamiento y conciencia. ¿Sería posible que esa persona pidiera a la Corte Suprema que determinara si el servicio militar obligatorio es una violación de sus derechos constitucionales? El orador desearía saber también cómo trata Venezuela a los testigos de Jehovah que se niegan a hacer el servicio militar.

32. La Sra. HIGGINS se refiere al párrafo 199 del informe y dice que simpatiza con la opinión del Gobierno de Venezuela de que quizás haya habido una interpretación equivocada en relación con las órdenes de expulsión y que los decretos de expulsión no se dictan en virtud del artículo 34 de la Ley de extranjeros, que se refiere a la deportación de personas que están ilegalmente en el país, mientras que el artículo 13 del Pacto se aplica a extranjeros que están legalmente en el territorio de un Estado parte.

33. La expulsión como caso distinto a la deportación está prevista en el artículo 35 de la Ley, lo que al parecer no permite revisar el caso. La oradora sigue creyendo que hay un problema en relación con la Ley de extranjeros, si bien conviene en que no está relacionado con el artículo 34.

34. La Sra. RUESTA de FURTER (Venezuela) dice que las leyes de Venezuela se fundan en el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Los diputados indios del Congreso Nacional no son representantes de los indios como tales. Lo mismo puede decirse de las diputadas, que se ocupan de cuestiones relacionadas con la mujer, pero que también se ocupan de otros temas.

35. En Venezuela todos los ciudadanos tienen derecho al voto, tanto si están alfabetizados como si no lo están. Ningún indígena ha sido senador o Presidente, pero muchos ocupan cargos oficiales. La misma oradora tiene un colega indígena que es fiscal.

36. Con arreglo al artículo 194 de la Ley orgánica sobre sustancias estupefacientes y sicotrópicas, algunos grupos indígenas, identificados de modo claro por las autoridades competentes, que consumen tradicionalmente yopo en ceremonias mágicorreligiosas están excluidos de la aplicación de esa Ley.

37. Venezuela es un Estado secular y en él se aceptan todas las confesiones religiosas que no se oponen al Estado.

38. La Sra. POITEVIEN (Venezuela) dice que el Congreso está examinando un proyecto de ley que enmendará el artículo 77 de la Constitución en lo relativo a la incorporación de las poblaciones indígenas a la vida nacional. Con la enmienda, que modifica la filosofía integracionista en la que se funda el artículo, se pretende promover la integración de los indígenas en la comunidad y ofrecer una visión pluralista y multicultural basada en el respeto de sus idiomas y creencias. Las disposiciones del proyecto de ley son conformes con el artículo 27 del Pacto.

39. En relación con el tema de los objetores de conciencia, cuestión que está estudiando el Ministerio Fiscal, la oradora dice que las leyes sobre el servicio militar no aceptan la objeción de conciencia con motivo de exención del servicio militar. Se dispone del recurso de amparo ante los tribunales para la protección de la libertad de pensamiento y creencias, pero la oradora señala que no se ha presentado ninguno de estos casos a los tribunales. Ha habido casos de personas que no deseaban hacer el servicio militar, pero sin declararse objetores de conciencia.

40. La Sra. RUESTA de FURTER (Venezuela) recuerda que Venezuela ha insistido mucho, junto con Suecia, para que en la Convención sobre los Derechos del Niño figurara la prohibición de reclutar para el ejército a niños menores de 18 años de edad. En Venezuela no hay antecedentes sobre la objeción de conciencia pero el Gobierno está estudiando la posibilidad de modificar la ley para ofrecer una posibilidad alternativa al servicio militar. Venezuela es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución sobre la objeción de conciencia que se presenta a la Comisión de Derechos Humanos cada dos años. La oradora señala que hay numerosas categorías de personas exentas del servicio militar como los estudiantes, las personas con padres a cargo, etc., y podría considerarse que los testigos de Jehová reúnen las condiciones para quedar también exentos de esa obligación.

41. La Sra. POITEVIEN (Venezuela) responde a una pregunta del Sr. El Shafei diciendo que no puede privarse de sus derechos políticos a una persona expulsada de Venezuela cuando regresa al país. El Sr. El Shafei ha comentado también las disposiciones relativas a la celebración de reuniones públicas. La oradora se refiere a la explicación de esta cuestión en los párrafos 380 y 381 del informe y dice que el único motivo de oposición de las autoridades a estas reuniones podría ser la ruta propuesta y no las razones de fondo de la reunión. De hecho, en Venezuela tienen lugar periódicamente manifestaciones antigubernamentales. Como es lógico, si una reunión pública entraña desórdenes y se cometen infracciones las autoridades se ven obligadas a interrumpirla, como por desgracia han tenido que hacer en ocasiones. La oradora responde a los comentarios del Sr. El Shafei sobre el odio racial manifestando su convicción de que estas leyes existen. Más adelante suministrará al Comité información adicional al respecto.

42. En relación con el derecho a votar de los presos y de las personas sin capacidad legal para ello, dice que sólo los reclusos en presidio (prisión rigurosa) pierden el derecho de voto; los presos de todas las demás categorías lo conservan. Las personas declaradas incapaces por tribunales civiles no tienen derecho de voto.

43. El PRESIDENTE dice que el Comité ha finalizado el examen de la lista de cuestiones e invita a los miembros a formular observaciones finales.

44. El Sr. PRADO VALLEJO da las gracias a la delegación de Venezuela por su excelente informe, su actitud de cooperación, sus respuestas satisfactorias a las preguntas del Comité y la gran buena voluntad demostrada. Venezuela está pasando por una época difícil, pero su democracia es fuerte y las iniciativas del Gobierno justifican el optimismo. Sin embargo, persisten problemas en la aplicación del Pacto y las preocupaciones del Comité se centran en tres cuestiones principales: en primer lugar, los retrasos en los procesos judiciales, especialmente cuando el procesado es un militar acusado de tortura, desapariciones, etc.; en segundo lugar, los incidentes de los tribunales militares que juzgan a civiles, a pesar de que el hecho parece ser contrario a la Constitución; y, en tercer lugar, la larga duración de la detención preventiva, que hace posible las torturas y los malos tratos. De todos modos, el orador confía en que a pesar de los problemas económicos y sociales de Venezuela la democracia prevalecerá en el país.

45. El Sr. SADI dice que los miembros el Comité parecen aceptar en general que la situación de los derechos humanos en Venezuela es buena. Las deficiencias señaladas parecen situarse en el nivel de los detalles y han quedado bien expuestas durante el diálogo. En especial, y en relación con los centenares de personas muertas durante el período de desórdenes de 1989, el orador confía en que los abusos de las fuerzas de seguridad denunciados fueran excepciones y, en todo caso, espera que las autoridades adoptarán medidas para evitar que se repitan. El orador expresa su reconocimiento por las iniciativas del Gobierno sobre el medio ambiente y las poblaciones indígenas.

46. La Sra. HIGGINS da las gracias a la delegación de Venezuela por su sólido informe que ofrece una base excelente para el diálogo con el Comité. Venezuela es una democracia activa y cabe decir que los acontecimientos inquietantes de que se ha informado no son típicos del país. Sin embargo, la oradora continúa preocupada por la persistencia de las noticias sobre torturas, desapariciones y ejecuciones sumarias, que suponen un problema real, incluso en el marco de una democracia vibrante. Deberían adoptarse tres medidas para resolver esta situación. La primera y más importante es que el Estado debe garantizar que se juzgue y se castigue a quienes cometieron tales actos y la oradora se ve obligada a afirmar que el diálogo sobre este punto no ha sido satisfactorio. Las respuestas han sido contradictorias, pues ha dicho al Comité, por una parte, que no se ha juzgado todavía a nadie pero que el Gobierno tiene mucho interés en resolver el problema y, por otra parte, que en un anexo figuran las cifras relativas a estos juicios. Luego se ha admitido que las cifras del anexo no se aplican a los funcionarios públicos. Es de agradecer que la delegación haya admitido la existencia de estos problemas, pero ha llegado el momento de hacer algo concreto al respecto. Una de las soluciones más evidentes es que tribunales civiles juzguen a los funcionarios públicos y otras personas responsables de delitos.

47. La oradora se refiere a otros puntos y dice que el período de ocho días de detención preventiva, con una ampliación posible de ocho días más, es demasiado largo y que en este período son mayores las probabilidades de que se

produzcan torturas. La cuestión de las minorías representa un dilema real, porque el deseo del Gobierno de interpretarlas en la vida del conjunto del país puede entrar en conflicto con el derecho que tienen, de conformidad con el artículo 27, de disfrutar de su propia cultura. Si esta cultura es nómada y las leyes tienen por objetivo asentar a la población se crea un problema. La oradora considera personalmente que no hay solución inmediata, pero que el tema merece reflexión. Tal como dijo anteriormente, hay que prestar más atención al artículo 35 de la Ley de extranjeros. Si se desea seriamente que no se repitan viejos problemas deben desplegarse recursos muy considerables para remediar los retrasos, convertir el amparo en un recurso realmente eficaz y aliviar también las lamentables condiciones de las prisiones.

48. El Sr. EL SHAFEI da las gracias a la delegación de Venezuela por su cooperación que ha permitido llevar a cabo un debate fructífero con el Comité. El orador aprecia la gran cantidad de nuevas leyes sobre derechos humanos de Venezuela, pero espera que la delegación haya tomado nota de las preocupaciones del Comité. Por ejemplo, el requisito de que el votante esté alfabetizado es incompatible no solamente con el Pacto sino también con la historia de la misma Venezuela, que ha estado relacionada con movimientos de liberación. Es de esperar también que el Gobierno sepa resolver las situaciones de emergencia sin infringir los derechos humanos básicos, en especial los que no están mencionados de modo concreto en la Constitución de Venezuela.

49. El Sr. WENNERGREN da las gracias a la delegación de Venezuela por su diálogo con el Comité que, según admite, ha seguido con cierta dificultad, puesto que las leyes del país parecen complicadas y detalladas. Sin embargo, la impresión general es que Venezuela es un Estado democrático. El país ha progresado mucho en el desarrollo de los derechos humanos, si bien todavía puede mejorar más. Sin embargo, el Pacto es muy exigente, y pocos o ninguno de los Estados partes son capaces de cumplir todos sus requisitos.

50. El orador señala con beneplácito algunos cambios positivos de los derechos humanos en Venezuela, como la nueva Ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, la creación de una dependencia de derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el fortalecimiento del Ministerio Público y los planes para crear una oficina del defensor del pueblo. Cabe mencionar también los cursos de capacitación en derechos humanos para personal administrativo, la prevista derogación de la Ley de vagos y maleantes, las nuevas leyes sobre la vida privada y las reuniones pacíficas y el estudio de un servicio sustitutorio para los objetores de conciencia.

51. El orador se muestra preocupado, por otra parte, ante el hecho de que se pueda retener a un detenido durante 16 días antes de llevarlo ante un juez. Ello no concuerda con el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto que requiere que esta medida se adopte sin demora. También le preocupa la necesidad de que las personas sometidas a torturas o malos tratos sean sometidas a examen médico a su debido tiempo, puesto que las pruebas médicas de los tipos de tortura que según Amnistía Internacional se han producido en Venezuela desaparecen a los pocos días.

52. El orador comparte la opinión del Sr. Lallah sobre el voto obligatorio. El derecho de voto es algo inherente a toda sociedad democrática, pero, en su opinión, hacerlo obligatorio no concuerda con el Pacto.

53. El orador no está convencido de que los procedimientos de investigación de los casos de tortura u otras violaciones denunciadas sean tan eficaces como deberían. Entiende que ha habido escasez de recursos para este fin, pero que se van a asignar más fondos.

54. Es muy importante difundir información sobre derechos humanos en todos los niveles de la sociedad, no sólo en los niveles más altos sino también entre los funcionarios que trabajan sobre el terreno y el público en general.

55. El orador expresa su agradecimiento a la delegación de Venezuela por su diálogo con el Comité que ha contribuido mucho a la comprensión de la situación.

56. El Sr. SERRANO CALDERA da las gracias a la delegación por su presentación del excelente informe y por su participación en el provechoso diálogo entablado.

57. El orador hace suyos los comentarios de otros miembros del Comité sobre la necesidad de mantener el recurso de amparo durante el estado de emergencia y de reducir la duración de la detención preventiva. Las respuestas de la delegación sobre estos puntos y sobre las cuestiones que el orador ha planteado en la presente sesión han sido alentadoras. Acoge con beneplácito las iniciativas que se han adoptado para mejorar el aparato legal del país con miras a garantizar una mayor protección de los derechos humanos en algunas esferas concretas del derecho. Es interesante constatar que el Tribunal Supremo ha ofrecido una interpretación positiva de las disposiciones del pacto y de otros instrumentos internacionales, aunque su condición no estuviera definida en la Constitución.

58. Los acontecimientos de 1989 y 1992 no se pueden pasar por alto. El orador hace suyos los comentarios de otros miembros de la Comisión sobre la necesidad de castigar a los responsables de actos de tortura, desapariciones y ejecuciones sumarias. Este tema le afecta mucho, puesto que lo que ocurre en Venezuela puede repercutir en toda América Latina. Se sabe que Venezuela es un país que ha desplegado constantes esfuerzos para defender la democracia y es loable que haya superado sus problemas anteriores y configurado una democracia que se ha mantenido durante varios decenios. El Sr. Prado Vallejo ha señalado acertadamente las dificultades derivadas de las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que no han podido garantizar la estabilidad política o económica y han provocado violaciones de los derechos humanos. Las políticas de reducción de la inflación y la deuda nacional en cualquier lugar del mundo pueden originar problemas sociales graves como el desempleo. Sin embargo, el orador confía en que Venezuela y otros países latinoamericanos estudiarán políticas sociales y económicas que les permitan mejorar su compleja situación. Es de esperar que los problemas de Venezuela se resolverán, tanto en el plano general como en el particular y que se producirá un fortalecimiento gradual de la democracia a lo largo de los

años. El orador da las gracias a la delegación por su participación y desea un futuro próspero para Venezuela.

59. El Sr. NDIAYE expresa su agradecimiento a la delegación por su cooperación con el Comité y por el excelente informe presentado.

60. El orador hace suyos los comentarios del Sr. Prado Vallejo y la Sra. Higgins. Los acontecimientos de 1989 y 1992 fueron lamentables. El orador confía en que los proyectos de ley que está examinando el Congreso tendrán efectos positivos y que, a pesar de las dificultades, los esfuerzos del Estado parte para mejorar la protección de los derechos humanos darán resultado.

61. El Sr. LALLAH felicita a la delegación por la presentación del informe, en el cual se exponen adecuadamente las leyes destinadas a proteger los distintos derechos del Pacto, pero no se describe adecuadamente la situación real en relación con la aplicación de esas leyes. En el informe se admite con franqueza que hay algunos problemas pendientes. Es cierto que Venezuela sufre también los efectos de la actual situación económica y las políticas que le han impuesto el FMI y otras organizaciones, pero esto no puede excusar violaciones graves como asesinatos, torturas u otros malos tratos, que no pueden atribuirse en absoluto al FMI. La delegación ha aceptado la posibilidad de que se hayan cometido violaciones de esa índole, pero ha dicho que todavía no se han juzgado. Al parecer hay buenas leyes, pero están socavadas por la corrupción. Las investigaciones duran demasiado y el orador no está convencido de que se hayan aplicado bien las leyes contra los funcionarios autores de violaciones de los derechos humanos.

62. El orador dice que quizás no se le ha entendido bien cuando ha planteado la cuestión de la privación de los derechos políticos. No ha preguntado si algunas personas pierden sus derechos políticos cuando se les asignan tutores legales, sino si hay otros grupos de personas a las que los tribunales privan de sus derechos políticos aunque mentalmente sean capaces de ejercerlos. La pregunta de por qué la ley penal considera la privación del derecho de voto como castigo no ha recibido respuesta.

63. El orador desea al Estado Parte los mejores éxitos en sus iniciativas para garantizar los derechos humanos y aplicar con más eficacia todas las leyes encaminadas a protegerlos.

64. El Sr. AGUILAR URBINA expresa también su agradecimiento a la delegación de Venezuela por el diálogo constructivo mantenido. El orador conoce muy a fondo Venezuela y tiene confianza en su sistema de democracia. Le sorprendió desagradablemente el intento de golpe de Estado, pero hay que elogiar a Venezuela por haber superado sus dificultades al respecto. Está convencido de que los derechos humanos se respetan y de que el sistema judicial se aplica adecuadamente y no se utiliza para ocultar abusos. El artículo 128 de la Constitución se ha interpretado en el sentido de que los instrumentos de derechos humanos tienen prioridad sobre la ley y la Constitución. Sin embargo, el derecho presenta algunas lagunas relativas a los tratados

internacionales y a los derechos humanos que no pueden suspenderse en estado de emergencia y el orador confía en que esas lagunas se colmarán.

65. La situación de la mujer en Venezuela ha mejorado de modo notable en los últimos años, especialmente mediante la ley sobre la igualdad. Sin embargo, al orador le preocupa que no haya progresado la aprobación de varios proyectos de ley presentados y que algunas leyes puedan utilizarse para no cumplir otras leyes. Por ejemplo, la Ley sobre delitos peligrosos es contraria a la presunción de inocencia e incompatible con el Pacto. La Ley de misiones, mencionada en el párrafo 465 del informe, es una afrenta a los pueblos indígenas. Hay que tomar más medidas para proteger el medio ambiente.

66. Los acontecimientos de febrero de 1989 preocupan mucho al orador y en especial el número de personas que desaparecieron y las denuncias de torturas cometidas durante estos hechos y con anterioridad a ellos. Se ha dicho que han aparecido en una fosa común los cadáveres de 68 personas que habían desaparecido y que se han encontrado 2 cadáveres más después de las investigaciones sobre 16 desapariciones; pero hubo centenares de desaparecidos y se necesita información sobre el destino de todos los demás y sobre la situación de la fosa común. El orador se muestra muy preocupado por la impunidad casi total de que disfrutaban los militares. Confía en que las autoridades civiles, y en especial los miembros de la Fiscalía General, puedan visitar los lugares de detención y se lleve a los tribunales a quienes hayan cometido abusos. Se ha dicho que esto no se ha hecho porque ha sido imposible identificar a los responsables. En tal caso hay que llevar ante la justicia al mando militar, aunque sólo sea por la negligencia que demostró al permitir que sucedieran los incidentes.

67. El PRESIDENTE da las gracias más sinceras a la delegación por su diálogo abierto y cordial con el Comité y por el excelente informe, que siguió las directrices del Comité. Venezuela mantiene una estructura democrática sólida que ha permitido al Gobierno y a las autoridades públicas ocuparse de las cuestiones de los derechos humanos.

68. Sin embargo, hay algunas cuestiones sobre las que los miembros del Comité han expresado cierta preocupación. La delegación habrá tomado debida nota de todas estas cuestiones y el Presidente confía en que las autoridades competentes tomen las medidas que permitan comunicar nuevos progresos en el tercer informe periódico sobre las garantías legales y la protección específica de los derechos humanos. El segundo informe periódico llevaba un retraso de dos años cuando se recibió. El Comité adoptará dentro de unos días una decisión sobre la fecha de presentación del tercer informe periódico y la comunicará al Gobierno.

69. El Presidente da las gracias a todos los miembros de la delegación de Venezuela por su valiosa contribución.

70. El Sr. ARTEAGA (Venezuela) expresa la sincera gratitud del Gobierno de Venezuela, del Ministerio Público y de la propia delegación por la oportunidad que han tenido de dialogar con el Comité. El orador aprueba muchos de los comentarios generales y concretos del Comité, que transmitirá a las autoridades correspondientes. Sobre todo agradece los comentarios de los miembros de la región latinoamericana que se han referido a la adhesión de Venezuela a la democracia y a su intención de fortalecer el sistema democrático.

71. El Sr. Sadi y el Sr. Wennergren han resumido muchos de los problemas que deben tratarse. El Sr. Sadi ha señalado acertadamente que la situación es buena en términos generales, pero que en sus detalles deja algo que desear. Quedan algunos problemas individuales y excepcionales pero esto no menoscaba en absoluto el compromiso general del Gobierno de mantener el Estado de derecho. No se ha alcanzado todavía el objetivo deseado, pero, como ha señalado el Sr. Wennergren, eso sucede en países de todas las partes del mundo, y Venezuela está haciendo todo lo posible para mejorar la situación. La delegación de Venezuela ha tomado nota de los comentarios y sugerencias del Sr. Aguilar Urbina y de su análisis favorable sobre el funcionamiento del sistema judicial. También ha tomado debida nota de los comentarios formulados por otros miembros sobre la lentitud de las investigaciones, la detención prolongada y la necesidad de garantizar que se lleve ante la justicia y se castigue a quienes cometan violaciones de los derechos humanos, y de las observaciones de la Sra. Higgins sobre la cuestión de las minorías y los problemas que plantean los esfuerzos para integrar a las poblaciones indígenas respetando al mismo tiempo su carácter.

72. El Sr. Lallah ha dicho que el informe no ilustra de modo suficiente la aplicación de la ley. Este punto se tendrá en cuenta en futuros informes. La delegación de Venezuela no ha dicho que los problemas económicos puedan excusar la inobservancia de los derechos civiles y políticos o que las políticas del FMI sean responsables de las muertes acaecidas, pero hubo ciertamente algunos problemas macroeconómicos que influyeron en los problemas políticos. Sin embargo, no se tiene la intención de escudarse en estos problemas y aducirlos como excusa de violaciones de los derechos humanos.

73. En relación con los comentarios del Sr. El Shaffei, en Venezuela todo el mundo tiene derecho a votar, aunque no sepa leer o escribir. El requisito de la alfabetización vale únicamente para ocupar cargos públicos.

74. La delegación de Venezuela transmitirá a las autoridades competentes los comentarios del Comité sobre la necesidad de realizar más investigaciones sobre los hechos de febrero de 1989. El orador se disculpa por el retraso en la presentación del segundo informe periódico y procurará que el tercer informe periódico se presente a su debido tiempo.

75. El orador comparte la preocupación del Comité sobre los proyectos de ley que tiene ante sí el Congreso Nacional y confía en que se aprueben en un futuro próximo. También está de acuerdo con el Sr. Wernnergren en que es necesario difundir entre la población a todos los niveles información sobre los derechos humanos. Agradece al Comité el espíritu constructivo que ha demostrado. La delegación de Venezuela transmitirá todas sus observaciones a las autoridades competentes.

76. El PRESIDENTE dice que el Comité ha finalizado su examen del segundo informe periódico de Venezuela.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.